



**DISTRITO JUDICIAL DE SANTA MARTA
JUZGADO QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO
SANTA MARTA**

Santa Marta - Magdalena
Dieciocho (18) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

VERBAL

47.001.31.53.005.2022.00198.00

I. OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO

Se encuentra al despacho la demanda VERBAL PARA LA CANCELACION DE LA OBLIGACION HIPOTECARIA, EXTINCION Y PRESCRIPCION DE LA HIPOTECA, presentada por JORGE ALBERTO CASTILLO GRANADOS Y MARITZA CECILIA ELINAN DE CASTILLO contra el FONDO NACIONAL DEL AHORRO, para decidir sobre su admisión.

II. CONSIDERACIONES

La demanda de naturaleza verbal para la cancelación de la obligación hipotecaria, extinción y prescripción de la hipoteca presentada por Jorge Alberto Castillo Granados y Maritza Cecilia Elinan de Castillo contra el Fondo Nacional del Ahorro, fue presentada inicialmente ante el Juez Cuarto Civil Municipal de la ciudad de Barranquilla, quien mediante proveído del 3 de octubre de 2022, procedió a rechazar la demanda por falta de competencia factor territorial, al encontrarse el inmueble sobre el cual recae el gravamen hipotecario No. 589 el 12/04/1999, objeto de cancelación de la presente demanda, en el municipio de SANTA MARTA, (MAGDALENA), específicamente en el Apartamento 202 del Edificio “El Parador” del Rodadero, corregimiento de GAIRA.

Remitida la demanda al presente distrito judicial fue asignada por reparto al Juzgado Primero Civil Municipal de Santa Marta, quien a su vez, procedió a declararse incompetente por el factor cuantía, habida cuenta que, se debe tener en cuenta que el presente caso gira en torno a la declaratoria de cancelación de la hipoteca contenida en la escritura N° 589 del 12 de abril de 1999, como consecuencia de la prescripción de la obligación que asciende a la suma de Doscientos Sesenta Y Cinco Millones Ochocientos Cincuenta

Y Cuatro Mil Ochocientos Ochenta Y Cinco Pesos Con Veintinueve Centavos MCTE (\$265.854.885,29).

Así las cosas, enviada la demanda a la oficina de reparto nuevamente, fue asignada en esta oportunidad a este Despacho Judicial. Empero encuentra este Juzgado, que los homólogos citados obviaron que la demanda se presentó contra el **Fondo Nacional del Ahorro**, la cual es una Empresa Industrial y Comercial del Estado, de carácter financiero de Orden Nacional, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, organizada como establecimiento de crédito de naturaleza especial, con personería jurídica, autonomía administrativa y capital independiente¹.

Por lo anterior, debe advertirse que el numeral 10 del artículo 28 del Código General del Proceso, dispone:

*“... En los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad pública, **conocerá en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad.**”*

*“Cuando la parte esté conformada por una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad pública y cualquier otro sujeto, **prevalecerá el fuero territorial de aquellas...**”*

Corolario de ello, resulta ser el conocimiento del presente proceso de los jueces civiles del circuito de Bogotá D.C., en tanto el Fondo Nacional del Ahorro tienen su domicilio en esa ciudad. Lo anterior, fue ratificado en asunto similar por la Honorable Corte Suprema de Justicia sala de Casación Civil, quien en providencia AC2197-2022 del veintiséis (26) de mayo de dos mil veintidós (2022), indicó:

“Pues bien, para dirimir este tipo de controversias, la reciente jurisprudencia de esta Corporación se ha decantado por acudir al precepto contenido en el artículo 29 del Código General del Proceso, según el cual «es prevalente la competencia establecida en consideración a la calidad de las partes... Las reglas de competencia por razón del territorio se subordinan a las establecidas por la materia y por el valor». Así fue sentado en proveído AC140- 2020, en el cual, mutatis mutandi, en una controversia de imposición de servidumbre de energía eléctrica, la Corte explicó lo siguiente:

«Como se anotó anteriormente, en las controversias donde concurren los dos fueros privativos enmarcados en los numerales 7º y 10º del artículo 28 del Código General del Proceso, como el que se presenta cuando una entidad pública

¹ <https://www.fna.gov.co/sobre-el-fna/normatividad/institucional%20Acuerdos/Acuerdo%202468%20de%202022%20Por%20el%20cual%20se%20adoptan%20los%20nuevos%20estatutos%20del%20FNA.pdf>

pretende imponer una servidumbre de conducción de energía eléctrica sobre un fundo privado, surge el siguiente interrogante: ¿Cuál de las dos reglas de distribución es prevalente?5

*Para resolver dicho cuestionamiento, el legislador consignó una regla especial en el canon 29 ibídem, el cual preceptúa que **“[e]s prevalente la competencia establecida en consideración a la calidad de las partes... Las reglas de competencia por razón del territorio se subordinan a las establecidas por la materia y por el valor”**.*

*En virtud de las pautas interpretativas previstas en los artículos 27 y 28 del Código Civil, que aluden en su orden a que, “[c]uando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu”, y “[l]as palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en éstas su significado legal”; **es dable afirmar, con contundencia, que con dicha regla lo que quiso el legislador fue dar prevalencia al factor subjetivo sobre cualquier otro, con independencia de donde se halle previsto, al expresar que la competencia “en consideración a la calidad de las partes” prima, y ello cobija, como se explicó en precedencia, la disposición del mencionado numeral 10° del artículo 28 del C.G.P.***

La justificación procesal de esa prelación muy seguramente viene dada por el orden del grado de lesión a la validez del proceso que consultan cada uno de esos factores de competencia, ya que para este nuevo Código es más gravosa la anulabilidad por el factor subjetivo que por el objetivo y territorial, pues, como se anticipó, hizo improrrogable, exclusivamente, la competencia por aquel factor y por el funcional (Art. 16).

En ese sentido, ante situaciones como la que se analiza, debe aplicarse la pauta de atribución legal privativa que merece mayor estimación legal, esto es, la que refiere al juez del domicilio de la entidad pública, por cuanto la misma encuentra cimiento en la especial consideración de la naturaleza jurídica del sujeto de derecho en cuyo favor se ha establecido, regla subjetiva que, en la actualidad, está enlazada con una de carácter territorial.

Por tanto, no es pertinente afirmar que el inciso primero del aludido precepto 29 se refiere exclusivamente a colisiones que se susciten entre factores de competencia, en el caso, el subjetivo y territorial, no respecto de los foros o fueros previstos en este último, toda vez que el legislador, dentro de su margen de libertad de configuración normativa, no excluyó en manera alguna las controversias que lleguen a suscitarse dentro del mismo u otro, a más que ello

desconoce cómo el factor subjetivo está presente en distintas disposiciones procesales, según se dejó clarificado en el anterior acápite». (CSJ AC140 de 2020, 24 ene. 2020, rad. 2019- 00320) (CSJ AC140 de 2020, 24 ene. 2020).

Por ende, en los procesos en que se ejercen derechos reales se aplica el fuero territorial correspondiente al lugar donde se encuentre ubicado el bien. Sin embargo, en el evento de que sea parte una entidad pública, la competencia privativa será el del domicilio de ésta, como regla de principio.

6. El asunto que originó la atención de la Corte, concierne a un proceso ejecutivo hipotecario incoado por el Fondo Nacional del Ahorro Carlos Lleras Restrepo contra José Germán Londoño Bedoya. Por tanto, al ser el Fondo Nacional del Ahorro Carlos Lleras Restrepo una «Empresa Industrial y Comercial del Estado, de carácter financiero de Orden Nacional, con Personería Jurídica, autonomía administrativa y capital independiente, estará vinculado al Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial. Entidad sometida al control y vigilancia por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia»⁶, creada mediante el Decreto Ley No 3118 del 26 de diciembre de 1968, la competencia para conocer de la presente controversia radicaría en el juez de su lugar de domicilio, correspondiente a la ciudad de Bogotá.

Recuérdese que el numeral 10° del artículo 28 impone, a efectos de determinar la competencia privativa del juez, que el convocante o convocado debe ser «una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad pública». En tal sentido, el precepto 68 de la ley 489 de 1998 prevé que «son entidades descentralizadas del orden nacional, los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades públicas y las sociedades de economía mixta (...)».

7. **Por tanto, al tener la demandante la calidad de entidad pública corresponde el conocimiento del asunto al Juzgado de Bogotá, pues tal es designado en virtud del foro privativo demarcado por la ley...**

Conclúyase entonces que, en los procesos en que se ejercen derechos reales se aplica el fuero territorial correspondiente al lugar donde se encuentre ubicado el bien. Sin embargo, en el evento de que sea parte una entidad pública, la competencia privativa será el del domicilio de ésta. merito por lo cual se ordenará la remisión del presente asunto a los Juzgados Civiles del Circuito de Bogotá D.C., quienes resultan ser los competentes de conocer del presente proceso.

Por lo expuesto, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Santa Marta,

II. RESUELVE:

1. Rechazar la demanda VERBAL PARA LA CANCELACION DE LA OBLIGACION HIPOTECARIA, EXTINCION Y PRESCRIPCION DE LA HIPOTECA, presentada por JORGE ALBERTO CASTILLO GRANADOS Y MARITZA CECILIA ELINAN DE CASTILLO contra el FONDO NACIONAL DEL AHORRO, de acuerdo con lo brevemente expuesto en la parte motiva de esta providencia.
2. Remitir la demanda con sus anexos, a los Jueces Civiles del Circuito de la Ciudad de Bogotá D.C., para su competencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



DIANA PATRICIA MARTÍNEZ CUDRIS
JUEZA